

**ANÁLISIS DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN
FORZADA EN RISARALDA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA JUSTICIA
TRANSICIONAL A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY
1448 DE 2011 (10 DE JUNIO DE 2011) A LA ACTUALIDAD.**

JULIÁN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

LUZ ZORAIDA RENTERÍA CASTRO

SANDRA MILENA PINEDA ECHEVERRI

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA

FACULTAD DERECHO

ESPECIALIZACION EN DERECHO CONSTITUCIONAL

PEREIRA

2015

**ANÁLISIS DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN
FORZADA EN RISARALDA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA JUSTICIA
TRANSICIONAL A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY
1448 DE 2011 (10 DE JUNIO DE 2011) A LA ACTUALIDAD.**

JULIÁN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

LUZ ZORAIDA RENTERÍA CASTRO

SANDRA MILENA PINEDA ECHEVERRI

Mg. EDGAR AUGUSTO ARANA MONTOYA

Director de Posgrados

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA

FACULTAD DERECHO

ESPECIALIZACION EN DERECHO CONSTITUCIONAL

PEREIRA

2015

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	5
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	6
2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACION.....	7
3. HIPÓTESIS	8
4. JUSTIFICACIÓN	9
5. OBJETIVOS.....	11
5.1 OBJETIVOS GENERALES.....	11
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	11
6. MARCO REFERENCIAL.....	12
6.1 ESTADO DEL ARTE.....	12
6.2 MARCO TEÓRICO	15
6.2.1 DESAPARICIÓN FORZADA	15
6.2.2 NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN CONTRA DE LA DESAPARICION FORZADA	15
6.2.3 JUSTICIA TRANSICIONAL.....	16
6.2.4 VICTIMAS	16
6.3 MARCO JURÍDICO	17
7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	28
7.1 TIPO DE INVESTIGACION	28

7.2 METODO DE INVESTIGACION.....	28
8. DESARROLLO TEMÁTICO	30
CAPITULO I. VICTIMAS DE DESAPARACION FORZADA EN RISARALDA..	30
CAPITULO II. DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE DESAPARICION FORZADA.....	32
2.1 MONTOS DE INDEMNIZACIÓN RECONOCIDOS POR LA LEY 1448 DE 2011.....	33
2.2 DISTRIBUCIÓN DE INDEMNIZACIÓN EN CASO DE MUERTE O DESAPARICIÓN FORZADA	34
CAPITULO III. JUSTICIA TRANSICIONAL Y LAS IMPLICACIONES DEL MODELO DE JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL CASO DE LAS VICTIMAS DE DESAPARICION FORZADA	36
9. CONCLUSIONES.....	49
10. BIBLIOGRAFÍA.....	51

1. INTRODUCCIÓN

La presente investigación está centrada en el análisis sobre la efectividad de la protección de las garantías otorgadas a las víctimas de desplazamiento forzado, desde la óptica del modelo de justicia transicional, el cual ha sido acogido por diversos Estados en una etapa posterior al conflicto, situación que no se pregona en Colombia, toda vez que aún existen fuertes olas de violencia proveniente de los grupos armados al margen de la ley, lo que genera una situación sub generis en la aplicación a nuestra realidad del conjunto de medidas judiciales y políticas como instrumentos para la reparación de las múltiples e incesantes violaciones a los derechos humanos.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La práctica ilegal de desaparición forzada no es ajena al Estado Colombiano, y en razón a ello la Constitución Política en su artículo 12 prohíbe dicho flagelo, además de las torturas, los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

La expedición del artículo 12 de la Norma Superior no sólo generó el reconocimiento del sujeto pasivo o víctima de la desaparición forzada, sino que su promulgación va encaminada a proteger, salvaguardar y garantizar los derechos de aquellas personas que se ven afectadas con dicho comportamiento, pero además dicho precepto constituye una prohibición universal o general encaminada a todas las personas, bien sean particulares o agentes del Estado.

La importante evolución normativa que ha tenido la desaparición forzada en el ordenamiento jurídico de nuestro país, ha establecido algunas medidas tendientes a prevenir, controlar, y sancionar dicho delito.

Ahora bien, teniendo en cuenta que Colombia se encuentra ad portas de aplicar el modelo de justicia transicional, en aras de finiquitar el conflicto armado y lograr la tan anhelada paz.

Sin embargo, y como ya se advirtió las medidas que cobija la justicia transicional deberán no sólo beneficiar al Estado y a los grupos insurgentes que acojan dicho modelo,

sino que la misma debe favorecer, entre otros, a las víctimas del desplazamiento forzado a través de instrumentos confiables y certeros que garanticen la verdad, la justicia y la reparación integral.

2.1 Problema de Investigación

¿Cuáles son los derechos de las víctimas de desaparición forzada en Risaralda a partir de la entrada en vigencia de la ley 1448 de 2011 (10 de junio de 2011) a la actualidad, desde el punto de vista de la justicia transicional?

3. HIPÓTESIS

Hipótesis Afirmativa

Se ha cumplido con los derechos de las víctimas de desaparición forzada en Risaralda a partir de la entrada en vigencia de la ley 1448 de 2011 (10 de junio de 2011) a la actualidad, desde el punto de vista de la justicia transicional.

Hipótesis Negativo

No se ha cumplido con los derechos de las víctimas de desaparición forzada en Risaralda a partir de la entrada en vigencia de la ley 1448 de 2011 (10 de junio de 2011) a la actualidad, desde el punto de vista de la justicia transicional.

4. JUSTIFICACIÓN

El Estado Social de Derecho adoptado en Colombia mediante la constitución Política de 1991, requiere y exige al estado garantizar a los habitantes el más alto nivel de vida con calidad y efectivizando los derechos fundamentales de las personas, situación que se desdibuja al vivir actualmente dentro de un conflicto armado que no ha sido combatido efectivamente por la justicia penal, es decir, la persecución de las bandas criminales por parte de la justicia no ha sido efectiva para conjurar las situaciones fácticas que se dan en el mismo y que llevan a la vulneración sistemática de los derecho humanos y del DIH, con el aliciente que los organismos internacionales.

Así las cosas, la lucha contra este tipos de situaciones y la generación de delitos no castigados que se traducen en impunidad, no es sólo función exclusiva de la justicia penal sino que la misma se logra de manera articulada con elementos como la rehabilitación, la reparación integral de la víctima y la reforma institucional, que es el objetivo principal de la Justicia teniendo presente que pueden existir limitaciones a la capacidad de los gobiernos para adoptar ciertas medidas de justicia, la principal limitante es entonces el derecho de las víctimas y su integral reparación. (CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-370 de 2006).

Se tiene entonces que es indispensable bajo el esquema de vulneración de derechos de las víctimas en Colombia, se analicen la aplicación de la reparación integral que comprende los aspectos de justicia, verdad y reparación bajo el test de razonabilidad, como

postulado instaurado por la jurisprudencia y analizado por la misma.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo General

Analizar la desaparición forzada en Risaralda desde el punto de vista de la justicia transicional a partir de la entrada en vigencia de la ley 1448 de 2011 (10 de junio de 2011) a la actualidad.

5.2 Objetivos Específicos

- ✓ Identificar las víctimas de desaparición forzada en Risaralda desde la entrada en vigencia de la ley 1448 de 2011 (10 de junio de 2011) a la actualidad.
- ✓ Determinar los derechos de las víctimas de desaparición forzada.
- ✓ Conceptualizar la justicia transicional y establecer las implicaciones jurídicas que conlleva la aplicación del modelo de justicia transicional en el caso de las víctimas de desaparición forzada.

6. MARCO REFERENCIAL

6.1 Estado de Arte

Informe de la Oficina En Colombia Del Alto Comisionado De Las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos. *Titulado La desaparición forzada de personas en Colombia Cartilla para la víctima*. Primera edición, Bogotá D.C., agosto 2009.

Aspectos: En dicho informe se hace énfasis en definir que es la desaparición forzada, así también da indicios de cómo identificar a las víctimas de desaparición forzada de personas entre otras.

De este se translitera el siguiente aparte:

“la desaparición forzada es una violación múltiple y continua de numerosos derechos humanos entre ellos, el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a la integridad personal, a un trato humano y a la prohibición de la tortura, el derecho al debido proceso, a un recurso efectivo y a las garantías judiciales, pero sobre todo el derecho a la vida” (Albaladejo Escribano, 2009:5-6).

De manera que se considera que el anterior informe es de gran utilidad para la retroalimentación de la presente investigación.

Informe a cargo del CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Titulado *“La Desaparición forzada tomo I: Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia.”* Primera edición, febrero de 2014.

Aspectos: El informe que se obtuvo tras la investigación de la desaparición forzada es el resultado de la valiosa interlocución de organizaciones de familiares víctimas de desaparición forzada y organizaciones defensoras de los derechos humanos. De manera que este informe cuenta con experiencias reales, que ayudaron a fortalecer el contenido del mismo.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). Derechos humanos, recopilación de instrumentos internacionales. Departamento de información pública 1.988.

Aspectos: Ahora bien, en dicho compendio se halla una recopilación de derechos internacionales y tratados, los cuales serán de gran valor para la presente investigación.

Monografía de Grado titulada *“El delito de desaparición forzada en Colombia y el deber de garantía del estado”*, por Maria Elena Maya Rico, Monografía presentada en la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Medellín, 2008.

Aspectos: Maya Rico (2008), en este trabajo de investigación hace referencia a la desaparición forzada de personas, lo que por ende constituye a una de las más graves violaciones a los derechos humanos y un ultraje a la dignidad humana, y por último lo califica como un crimen internacional. En cuanto a su investigación desarrolla una

descripción analítica de las diversas normatividades que existen a nivel nacional e internacional sobre la criminalización de la desaparición forzada.

Tesis titulada “*Desaparición forzada de personas. Desarrollo del fenómeno y respuestas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*” por Gabriella Citronni, 2003.

Aspectos: Citronni (2003), en esta tesis hace referencia al origen y desarrollo de la práctica de desaparición forzada de personas, haciendo énfasis específicamente en América Latina en la década de los 70, esto según Ageitos (1987), de manera que esta investigación se encuentra acorde con el tema de estudio, por lo cual se toma como referente.

Monografía de grado titulada “*El Estado Colombiano frente al delito de desaparición forzada*” por Adolfo Barrera Berrio y Yoan A, Medina Alvis, presentada a la facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, 2011.

Aspectos: la monografía trata sobre la desaparición forzada de personas e n el cual se evalúan la aplicación de la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia sobre la responsabilidad del estado.

6.2 Marco Teórico

6.2.1 Desaparición forzada:

Según Albaladejo Escribano (2009), la desaparición forzada constituye a una violación de los derechos humanos, siempre y cuando los hechos sean cometidos por el Estado a través de sus agentes o a través de personas o grupos de personas que actúen con la autorización o apoyo del estado. Así también, se define como un crimen de lesa humanidad cuando entra entre otras características tales como: multiplicidad de víctimas “generalizada” o por parte de una práctica frecuente “sistemática”. (ALBALADEJO ESCRIBANO, 2009: 5).

6.2.2 Normas Nacionales e Internacionales en contra de la desaparición forzada

- El artículo 12 de la Constitución Política Colombiana de 1991, prohíbe la desaparición forzada
- La ley 589 de 2000, condena como un delito penal la desaparición forzada, eso en el Artículo 165 del Código Penal Colombiano.
- La convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas, esta se puso en vigor en Colombia en el año 2005.
- Sistema de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas y sistema Interamericano.
- Desaparición forzada generalizada o sistemática, en estos casos los presuntos autores pueden bajo ciertas condiciones ser sometidos a juicio o

sancionados por la Corte Penal Internacional o mediante la aplicación del principio de jurisdicción Universal.

6.2.3 Justicia Transicional

De acuerdo con Boterno et al (2006), la justicia transicional se entiende como los procesos a través de los cuales se realizan transformaciones radicales de un orden social y político, bien sea por el paso de un régimen dictatorial a uno democrático, bien por la finalización de un conflicto interno armado y la consecución de la paz (Boterno et al., 2006).

6.2.4 Víctimas

Segun la Ley 1448 de 2011, se consideran víctimas, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas

las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización (Ley 1448, 2011).

6.3 Marco Jurídico

- Constitución política de 1991
- Ley 599 de 2000.
- Ley 890 de 2004.
- Ley 906 de 2004.
- Ley 1448 de 2011
- Proyecto de Acto Legislativo 014/11S-094/11C
- Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 23 de marzo de 1976 e incorporado a la legislación colombiana mediante Ley 74 de 1968
- Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución No. 217 del 10 de diciembre de 1948
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor el día 3 de enero de 1976.
- Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, entró en vigor el día 23 de marzo de 1976.
- Los cuatro convenios de Ginebra de 1949, aprobados por la Ley 5° de 1980, y los Protocolos Adicionales I y II de 1977, el primero aprobado mediante la Ley 11 de

1992. Frente a los conflictos armados de naturaleza interna encontramos el artículo 3° comuna los cuatros convenios de Ginebra de 1949, el protocolo II de 1977, adicional a los mencionados Convenios aprobado por la Ley 171 de 1994: cuerpo normativo conocido como "Derecho de Ginebra". La preceptiva internacional anterior a los convenios de Ginebra se conoce como "Derecho de la Haya" dentro de la cual cabe mencionar:

- La Declaración de San Petersburgo de 1868, sobre la prohibición de la utilización de ciertos proyectiles en tiempo de guerra.
- La Declaración de la Haya de 1899 que prohíbe el empleo de las balas que se hinchán o aplastan fácilmente en el cuerpo humano.
- El Convenio de la Haya del 18 de octubre de 1907 y reglamento anexo sobre las leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre.
- La Convención de la Haya de 1907, relativa a la colocación de minas submarinas automáticas de contacto.
- La Convención de la Haya del 18 de octubre de 1907, sobre los Derechos y deberes de las Potencias Neutrales en caso de guerra terrestre.
- El Convenio de la Haya del 18 de octubre de 1907, concerniente al Bombardeo por medio de Fuerza Navales en tiempo de guerra
- El Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925, sobre la prohibición del uso, en la guerra, de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos.
- La Convención de la Haya del 14 de mayo de 1954 para te protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, reglamento para su aplicación.

- La Convención sobre la Prohibición del desarrollo, producción y almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas), tóxicas y sobre su Destrucción, del 10 de abril de 1972.
- Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles, del 10 de octubre de 1976.
- Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, del 10 de octubre de 1980:
- Protocolo sobre fragmentos no localizables;
- Protocolo sobre prohibición o restricción del empleo de minas armas trampa y otros artefactos y su anexo técnico; Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias.
- Resolución sobre los sistemas de armas de pequeño calibre.
- El Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos - acogida en Colombia mediante la Ley 74 del año 1968.
- El Protocolo Opcional del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos ratificado el 28 de octubre de 1.969.
- El Segundo Protocolo Opcional sobre el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, relacionado con la abolición de la pena de muerte ratificada el 5 de Agosto de 1.997.
- El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y culturales (Entrada en vigor para Colombia: 3 de Enero de 1976).

- La convención Americana de Derechos Humanos - valida en nuestro país mediante la Ley 16 de 1972.
- La Convención en contra de la tortura y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes: (Vigente para Colombia a partir del 7 de Enero de 1.988).
- La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.
- La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer la cual entro en vigencia el 18 febrero de 1.982.
- La Convención sobre los Derechos del niño del 24 de Enero de 1.991.
- La Convención sobre la protección de tos derechos de los trabajadores Inmigrantes del 24 de mayo de 1.995.
- La convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones Forzadas – ONU del 17 de agosto de 1.998.
- La Declaración sobre el Derecho y el Deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los Derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos según la resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas del 8 de marzo de 1999.
- La Declaración Americana de los Derechos Humanos y los Deberes del Hombre. Bogotá, 1948.
- La Convención Americana de los Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica" de 1969, la cual entro en vigor para Colombia el 18 de julio de 1978.

- La Declaración sobre el artículo 62 de la Convención, que reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver causas relacionadas con la Convención en vigor en 1.978.
- El Protocolo Adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos, o Protocolo de San Salvador.
- La Convención Interamericana para prevenir y condenar la tortura de 1.987.
- La convención de Viena o sobre los tratados del 23 de Mayo de 1.969.
- Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio, adoptado por la Resolución 96 del 11 de diciembre de 1946 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
- Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, entró en vigor el 4 de enero de 1969.
- Convención sobre la Esclavitud, firmada en Ginebra el día 25 de septiembre de 1926.
- Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes.
- Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979.
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

- Ley 288 de 1996, por medio del cual se estableció el procedimiento de conciliación para que el estado realice indemnizaciones en casos de condenas proferidas por el Comité de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la violación de los derechos humanos.
- Ley 589 de 2000 Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura, y se dictan otras disposiciones Ley 707 de 2001 Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas de Belém do Pará
- Ley 405 de 1997 Por medio de la cual se aprueba la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
- Ley 409 de 1997 Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura
- Ley 297 de 1996 Por medio de la cual se aprueba el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la Pena de Muerte
- Ley 387 de 1997 por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia
- Decreto 2569 de 2000 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras disposiciones
- Decreto 2007 de 2001 Reglamentación en lo relativo a la atención a la oportuna atención a la población rural desplazada por la violencia

- Decreto 951 de 2001 Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 3ª de 1991 y 387 de 1997, en lo relacionado con la vivienda y el subsidio de vivienda para la población desplazada
- Decreto 1276 de 1997 Por el cual se promulga la "Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -Convención de Belém do Pará
- Ley 22 de 1981 Por medio de la cual se aprueba "La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 2106 del 21 de diciembre de 1965, y abierta a la firma el 7 de marzo de 1966
- Ley 51 de 1981 Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmada en Copenhague el 17 de julio de 1980.
- Ley 70 de 1986 Por medio de la cual se aprueba la "Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", adoptada en Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984
- Ley 26 de 1987 La Convención Internacional sobre la eliminación del crimen del “Apartheid”
- Ley 248 de 1995 Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994

- Ley 467 de 1998 Por la cual se aprueba la “enmienda del artículo 8 de la Convención Internacional de 1966 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial”, adoptada en Nueva York el 15 de enero de 1992
- Ley 74 de 1968 Por medio del cual se aprueba el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos
- Ley 319 de 1996 Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"
- Decreto 429 de 2001 Por el cual se promulga el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Protocolo de San Salvador, suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988
- Decreto 105 de 2001 Por el cual se promulga la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción
- Decreto 2113 de 2001 Creación de la Comisión intersectorial nacional para la acción contra las minas antipersonal
- Ley 11 de 1992 Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I)
- Ley 171 de 1994 Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)

- Ley 554 de 2000 Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción
- Ley 759 de 2002 Por medio de la cual se dictan normas para dar cumplimiento a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción y se fijan disposiciones con el fin de erradicar en Colombia el uso de las minas antipersonal.
- Decreto 860 de 1998 Por el cual se reglamenta lo relativo a la protección y el uso que darse al nombre y el emblema de la Cruz Roja, se protegen sus actividades y se facilita la prestación de los servicios humanitarios en Colombia
- Ley 833 de 2003 Por medio de la cual se aprueba el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados
- Decreto 0082 de 1996 Por el cual se promulga el “Protocolo Adicional a Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I)”, adoptado en Ginebra el 8 de junio de 1977
- Decreto 0509 de 1996 Por el cual se promulga el “Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)”, hecho en Ginebra el 8 de junio de 1977
- Ley 469 de 1998 Por la cual se aprueba la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse

excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, hecha en Ginebra el diez de octubre de 1980 y sus cuatro protocolos

- Directiva 09 de 2003 - Ministerio de Defensa Políticas del Ministerio de Defensa nacional en materia de protección de los derechos humanos de sindicalistas y defensores de derechos humanos
- Directiva Presidencial 01 de 2000 Respeto a los derechos humanos con motivo a la entrada en vigor del Código Penal Militar
- Ley 578 de 2000 Por medio de la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas relacionadas con las fuerzas militares y de policía nacional
- Decreto 0094 de 1992 Por el cual se promulgan la Convención de los derechos del niño y la reserva formulada por Colombia respecto de su artículo 38, numerales 2o y 3º
- Decreto 1310 de 1990 Creación del Comité Interinstitucional para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos de la niñez y juventud
- Ley 12 de 1991 Aprobación de la Convención sobre los derechos del niño
- Decreto 519 de 2003 Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
- Ley 288 de 1996 Por medio de la cual se establecen instrumentos para la indemnización de perjuicio a las víctimas de violaciones de derechos humanos en virtud de lo dispuesto por determinado órganos internacionales de Derechos Humanos.

- Ley 340 de 1996 Por medio de la cual se aprueba la "Convención para la protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado", el "Reglamento para la aplicación de la Convención", y el "Protocolo para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado", firmados en La Haya el 14 de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954).

7. DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 Tipo de Investigación

Para la ejecución de la presente propuesta de investigación se propone un enfoque descriptivo y comparativo en el que se enmarque una investigación de corte socio-jurídico, ya que se considera que la integración de todos estos elementos metodológicos permitirá una mayor comprensión de la problemática planteada.

Se considera que un enfoque descriptivo dentro de la investigación aportará elementos importantes para alcanzar el objetivo general propuesto.

Según Dogan y Pélassy (1990) afirman que “*dos de los fines principales del análisis comparativo en Ciencias Sociales son, a) evitar el etnocentrismo y b) descubrir regularidades o leyes en la realidad social*”. Encontrar esas regularidades en las respuestas que han recibido las víctimas que solicitan su inscripción en el Registro Único en el Municipio de Viterbo, es un paso importante para tener una mayor comprensión de la problemática propuesta.

Finalmente se ha advertido que se trata de una investigación sociojurídica, lo que implica que es un ejercicio que vincula los aportes de otras disciplinas a los estudios del derecho, en este sentido se encuentra que:

Las investigaciones interdisciplinarias sobre del derecho constituyen un campo en expansión que ha producido durante las últimas décadas—tanto en América Latina como en otras partes del mundo—algunas de las contribuciones más interesantes al estudio del derecho. Este amplio campo de investigación—al que se alude con frecuencia en nuestro medio con el adjetivo “socio jurídico”— combina los aportes no sólo de la sociología— como el término “socio jurídico” pareciera indicar de forma estrecha— sino también de la ciencia política, la economía, la antropología, la historia y la teoría social. (Rodríguez, 2002, p. 01)

La caracterización ofrecida por el Profesor César Rodríguez permite comprender que dentro de esta investigación se tendrán en cuenta los aportes de todas aquellas disciplinas e instituciones que contribuya con su quehacer a la consecución de los objetivos planteados ya que se parte del presupuesto de que *“la investigación social aplicada se expresa en las políticas públicas o en el desarrollo de tecnologías sociales, en las instituciones y la manera como se instituyen y a la vez moldean el quehacer cotidiano de la gente”* (Plata, 2005, p. 02).

7.2 Método de Investigación:

Al tratarse de una investigación socio jurídica, con un alto contenido descriptivo, se requiere de un trabajo participativo en el que se realice revisión documental de los casos que configurarán la muestra, esta revisión requiere de un ejercicio de lectura crítica, de análisis y síntesis de los hallazgos más importantes.

8. DESARROLLO TEMATICO

CAPITULO I. VICTIMAS DE DESAPARACIÓN FORZADA EN RISARALDA

De acuerdo con la Unidad de Víctimas (2012), la desaparición forzada según datos históricos en Risaralda se presentaron un total de 470 personas afectadas por el hecho, según el periodo analizado de 1985 a abril de 2012, en el informe se evidencia que la ocurrencia del hecho tiene una tendencia creciente y se acentúa con mayor intensidad entre el 2001 al 2005, por su parte el año 2002 alcanza la cúspide sobresaliendo entre los otros años.

Ilustración 1. Grafica Histórico víctimas de desaparición forzada en Risaralda del 1982 a abril del 2012.



Fuente: Universo de Víctimas, Elaborado por la Red Nacional de Información Grupo Análisis e Investigación. Tomado de

<http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Risaralda.pdf>, p.13

Ahora bien, según las últimas cifras publicadas por la Unidad de Víctimas, en Risaralda se entregó a 354 víctimas de desaparición forzada indemnizaciones en el mes de Junio de 2014.

De manera que la Unidad para la atención y reparación Integral de víctimas hizo entrega a 354 víctimas del conflicto armado en el departamento de Risaralda desde la dirección territorial en el eje cafetero un valor aproximado a 1.734 millones de pesos

De acuerdo con la unidad de atención y reparación integral (2014), Estas indemnizaciones fueron destinadas a 163 víctimas en el municipio de Dosquebradas por valor de 692 millones de pesos, en Pereira a 135 por valor de 784 millones de pesos, en Quinchía a 38 por valor de 102 millones de pesos, en La Virginia a 5 por valor de 27 millones de pesos, en Apia a 4 por valor de 19 millones de pesos, en La Celia a 2 por valor de 23 millones de pesos, en Marsella a 2 por valor de 21 millones de pesos, en Santa Rosa de Cabal a 2 por valor de 30 millones de pesos, en Pueblo Rico a 1 por valor de 25 millones de pesos, en Santuario a 1 por valor de 8 millones de pesos, y en Guática a 1 por valor de 3 millones de pesos.

CAPITULO II: DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE DESAPARICION FORZADA

De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas de 2007 (sin entrar aún en vigor), que es la máxima autoridad en este tema, las víctimas de desaparición forzada tienen varios derechos, en particular:

- ✓ Derecho a reparación: la compensación debe cubrir los daños físicos y psicológicos, las oportunidades perdidas incluyendo el empleo, daños materiales y pérdida de bienes incluyendo los potenciales, daños morales y costes derivados de la asistencia legal, servicios médicos y medicinas y servicios sociales y psicológicos.
- ✓ Derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, el progreso y los resultados de la investigación y la suerte corrida por la persona desaparecida.
- ✓ En caso de que la víctima material esté viva, ésta tiene derecho a una liberación inmediata e incondicional.
- ✓ En caso de que la víctima haya muerto, los familiares tienen derecho a que el gobierno busque, localice, respete, identifique y les devuelva los restos mortales.
- ✓ Derecho ejecutable a una compensación puntual, justa y adecuada, que debe incluir daños materiales y morales.
- ✓ Derecho a las medidas adecuadas que concedan bienestar social, asuntos financieros, legislación familiar y derechos de propiedad. (Recuperado de <http://www.ediec.org/es/areas/descripcion/victimas-y-sus-derechos/>).

La Reparación Integral Individual, estipula que tienen derecho a reparación integral las víctimas del conflicto armado interno en Colombia, según lo señala la Ley 1448 de 2011, *todas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos que ocasionaron graves violaciones a las normas internacionales de Derechos Humanos y/o infracciones al Derechos Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado interno, ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, salvo en el caso de restitución de tierras, que solo será por situaciones presentadas a partir del 1 de enero de 1991.*(Unidad de Víctimas, tomado de <http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/en/79-noticias/2626-en-risaralda-354-victimas-recibieron-indemnizacion-en-el-mes-de-junio>).

De igual forma la unidad de víctimas aclara que el artículo 149 del Decreto 4800 de 2011 definió que: *tienen derecho a la reparación, las víctimas que se hayan visto afectadas por los siguientes hechos: homicidio, desaparición forzada, secuestro, lesiones personales, tortura, delitos contra la libertad e integridad sexual, reclutamiento forzado de menores de 18 años y desplazamiento forzado; igualmente tienen derecho a la restitución de tierras quienes hayan sufrido despojo o abandono forzado de tierras.*

2.1 Montos de indemnización reconocidos por la Ley 1448 de 2011.

La ley 1448 de 2011 reza que los montos de indemnización serán de hasta 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que se le entregan a las víctimas por: *homicidio,*

desaparición forzada, secuestro, lesiones que produzcan o no incapacidad permanente, tortura o tratos inhumanos y degradantes, delitos contra la libertad e integridad sexual cometidos debido a la condición etaria, de género o étnica de la víctima.

2.2 Distribución de la indemnización en caso de muerte o desaparición forzada

La ley estipula que en caso de concurrir varias personas con derecho a la indemnización por la muerte o desaparición de la víctima, el monto de la indemnización administrativa se distribuirá así:

- Casado o con compañero (a) permanente o pareja del mismo sexo con hijos, el 50% para el cónyuge y 50% para los hijos.
- Casado o con compañero (a) permanente o pareja del mismo sexo sin hijos con padres, 50% para el cónyuge y 50% para los padres vivos.
- Casado o con compañero (a) permanente o pareja del mismo sexo sin hijos sin padres, 100% para el cónyuge.
- Relación cónyuge vigente y una relación de convivencia con un compañero o compañera permanente o pareja del mismo sexo, el monto de la indemnización que les correspondería en calidad de cónyuge, compañero o compañera o pareja del mismo sexo se repartirá por parte iguales.
- Soltero con hijos y sin padres, 100 % para los hijos.
- Soltero sin hijos y sin padres, 100 % para los abuelos.

- Sin familiares, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reconocerá una indemnización de manera simbólica y pública.

CAPITULO III. JUSTICIA TRANSICIONAL Y LAS IMPLICACIONES DEL MODELO DE JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL CASO DE LAS VICTIMAS DE DESAPARICION FORZADA

La justicia transicional se define como "la concepción de la justicia asociada a periodos de cambio político, caracterizada por respuestas legales para afrontar las violaciones de regímenes represores anteriores" (Cita González Chavarría a Teitel, 2003: 69).

De igual manera Bick Ford (2005), lo define como "un campo de actividad e investigación enfocado en cómo afrontan las sociedades los legados de abusos pasados contra los derechos humanos, atrocidad en masa y otras formas de trauma social severo, incluyendo el genocidio o la guerra civil, con el fin de construir un futuro más democrático, justo o pacífico" (Cita González Chavarría a Bick ford, 2005: 1045).

Ahora bien, luego de ver la definición de la justicia transicional por dos autores se hace necesario la definición de las implicaciones e impactos dentro de un esquema penal, tanto para los procesados como para las víctimas que merecen especial tratamiento, así pues, Rodrigo Uprimny define la misma como:

Los procesos a través de los cuales se realizan transformaciones radicales de un orden social y político, bien sea por el paso de un régimen dictatorial a uno democrático, bien por

la finalización de un conflicto interno armado y la consecución de la paz. (Botero et al., 2006, p.6).

Así las cosas, la justicia transicional aparece como un modelo de justicia alterna y diferente al modelo de justicia ordinaria que busca particularmente dos cosas por una parte la aplicación de un castigo por la comisión del hecho punible junto con la reparación integral de la víctima y a su vez la resocialización del victimario, lo que implica que el derecho penal ha de propugnar por el cumplimiento de estos objetivos y especialmente haga efectivo los derechos de las víctimas (Op. Cit 2, Botero).

Ahora la justifica transicional ha hecho eco en organismos internacionales, no obstante en ellos el fundamento es la reparación a las víctimas y así lo ha dejado claro la ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS bajo el siguiente tenor:

“(…) El principio esencial que consagra el concepto real de hecho ilícito (principio que parece establecido por la práctica internacional y en particular por los laudos de los tribunales arbitrales) es que la reparación debe, en toda la medida de lo posible, hacer desaparecer las consecuencias del hecho ilícito y restablecer la situación que, con toda probabilidad, habría existido de no haberse cometido el hecho” (CORTE PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL, caso *Factory of Chorzów*, Merits, 1928, Series A, No. 17, Pág. 47.).

A ello se suma que el modelo transicional pretende centrarse en el futuro otorgando una importancia fundamental a la búsqueda de mecanismos a través de los cuales se puede adquirir conciencia al implicado acerca del daño que causó, reconocer su responsabilidad e intentar reparar ese daño.(Rettber, 2001, p.123).

De manera que lo que se quiere entonces además de todo una reconciliación entre víctimas y victimario, basada en el perdón solicitado por éste y obtenido con la voluntad de aquella (Morris, s/f, p.597), se busca una implicación más allá del castigo. (Op. Cit 3, Botero).

La Justicia transicional exige equilibrar las exigencias contrapuestas de paz y justicia y se caracteriza por negociaciones políticas entre los diferentes actores, tendientes a lograr acuerdos satisfactorios para todas las partes como para que éstas decidan aceptar la transición.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ha advertido el alcance de la justicia transicional en el proceso penal advirtiéndolo que:

“(…) el criterio de la reparación integral, fundamentado en la importancia y relevancia que ostentan los derechos humanos en el ámbito interno e internacional, debe ceñirse a los parámetros y postulados de justicia restaurativa (...), entre los que vale la pena destacar los siguientes: “(...) b. Que las reparaciones sean coherentes y complementarias con los otros componentes de la justicia transicional, es decir, con el esclarecimiento de la verdad, la reconstrucción de la memoria histórica, la aplicación de la justicia y las reformas institucionales, ya que sólo de esa manera se logrará el objetivo último de las reparaciones, que incluye la dignificación de las víctimas. “c. Que las reparaciones mantengan la integralidad interna, es decir, que logren un adecuado balance entre medidas individuales y colectivas, así como entre medidas materiales y simbólicas, ya que es la única manera de asegurar que las víctimas se sientan realmente reparadas. Así mismo, el concepto de reparación integral implica que las medidas de reparación contemplen la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. “d. Que la reparación sea adecuada, en el sentido de que las medidas de reparación deben estar acordes y se

proporcionales con [las lesiones cometidas a los derechos humanos]. “e. Que las reparaciones sean efectivas, es decir, que se cumplan efectivamente en la realidad.” (...)” (COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN, 2007, p.24 y 25).

Es preciso entonces señalar que en Colombia la muestra fehaciente de la Justicia Transicional es el proceso de justicia y paz establecido en la Ley 975 de 2005, pues esta norma al igual que la justicia transicional busca llevar a cabo una transformación social y política buscando una situación pacífica, situación que su vez es compleja pues implica la difícilísima tarea de equilibrar la justicia y la paz. Ello se traduce en señalar que son tan importantes los derechos de las víctimas como el de los procesados. Pero más allá de esto existen tensiones entre las exigencias jurídicas internacionales relativas a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de guerra o de lesa humanidad, y las restricciones impuestas por las negociaciones de paz llevadas a cabo por los actores armados con miras a lograr la paz.

Teniendo presente lo anterior se tiene que organismos internacionales han aceptado la implementación del tipo de justicia transicional pero ha puesto límites a la misma siendo los mismos la reparación a las víctimas, así lo ha expresado la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH):

La CIDH insiste en la necesidad de que las autoridades del Estado colombiano, específicamente los órganos encargados de la administración de justicia y de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, apliquen con todo el rigor la Ley y la decisión de la Corte Constitucional a fin de que las víctimas y la sociedad colombiana puedan saber la verdad

sobre la perpetración de los graves crímenes ocurridos durante las últimas décadas del conflicto armado interno. La implementación del régimen vigente sólo podrá satisfacer los estándares internacionales en la medida en que la imposición de las penas atenuadas resulte necesariamente subsidiaria a la obtención de la verdad, y no descansa exclusivamente o principalmente en la confesión de los imputados. (COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2006).

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la aplicación de la justicia transicional, les ha recordado a los Estados que al suscribir la Convención Americana sobre derechos Humanos han aceptado tomar medidas razonables para la prevención de los derechos humanos; en caso de haberse presentado vulneración a los mismos debe llevarse a cabo una investigación seria que garantice la adecuada reparación a las víctimas. (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de Fondo).

Ahora Naciones Unidas en el Conjunto de Principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, reconocidos por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, conllevan a los estados a garantizar la amplia participación de las víctimas en un proceso judicial. (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Suárez Rosero. Reparaciones. Sentencia de enero 20 de 1999. Serie C No. 44).

Y es que ha sido de tal impacto la implementación de la Justicia Transicional que la Organización de Naciones Unidas no ha escatimado esfuerzos para difundir su aplicación a través de sus informes y boletines informáticos en los siguientes términos:

“La justicia transicional como restaurativa están surgiendo como unas alternativas importantes al juicio y al encarcelamiento como medios de mantener a los delincuentes rindiendo cuentas, de una forma en que respondan a las necesidades de delincuentes, víctimas y de la comunidad. Confiar plenamente en el encarcelamiento como una respuesta a todos los delitos es una propuesta muy cara que de manera razonable no puede ser mantenida por ningún país. La justicia restaurativa conlleva una promesa como una alternativa efectiva a las respuestas tradicionales con respecto a los delincuentes. A menudo la tarea más difícil de todas es crear un "ambiente pro reforma", basado no sólo en miedos colectivos sino en el respeto a los valores democráticos y a los derechos humanos”. (ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Boletín ONU No. 05/030. Chapultepec, 2005).

Debe advertirse que la deontología de la justicia transicional es que hacer con una sociedad que enfrenta graves atentados contra los derechos humanos dentro de un esquema de conflicto armando y allí es donde surgen interrogantes como ¿Deben ser castigados los presuntos responsables? ¿Deben existir beneficios y amnistías con tal que se sepa la verdad y se coopere con la justicia?

Sin embargo estos interrogantes como muchos otros no son de fácil respuesta dado que la sociedad colombiana ha enfrentado crímenes dolorosos y las víctimas se aferran a que se dé una adecuada y eficaz justicia, ello por la tradición de que todo crimen debe ser reprimido con severidad, esta también es una cuestión de costumbres.

Según se evidencia se ha presentado una transformación muy importante en la manera como en la actualidad se enfocan las transiciones de la guerra a la paz o de las dictaduras a las democracias, que justifica ampliamente la creación de la categoría JTr. Y es que, si uno detalla la expresión, lo novedoso de la JTr consiste en la introducción del sustantivo "justicia". En efecto, dentro del recientemente creado paradigma de JTr, la justicia aparece como una exigencia que cualifica de manera importante los procesos transicionales, pero que a la vez se ve profundamente determinada por tales procesos. De esa manera, el concepto de justicia adquiere un significado y unas implicaciones particulares, que se distinguen no sólo de lo que significan e implican las exigencias de justicia en contextos de normalidad, sino que además se alejan de aquello que significaron e implicaron tales exigencias en procesos transicionales anteriores a los que se han desarrollado en los últimos treinta años. (Saffon & Uprimny, 2006, p.6).

La transición como modelo de justicia viene dada desde la Segunda Guerra Mundial tras la victoria de los aliados siendo considerada como el primer periodo de ella, seguido de diferentes situaciones y épocas importantes que se reseñan a continuación:

Éste es el caso de Teitel, quien realizó una juiciosa genealogía de la JTr y planteó la existencia de tres periodos históricos distintos: el periodo de la segunda posguerra, caracterizado por reconocer en el castigo de los violadores de derechos humanos un valor universal y exigible sin restricciones; el periodo posterior a la guerra fría, que hubo en cambio de confrontar la tensión entre las exigencias jurídicas de justicia y las necesidades políticas de paz; y la época actual, que demuestra una tendencia hacia la normalización de la justicia transicional y, en concreto, hacia el empleo del lenguaje del derecho de la guerra en contextos de paz, tal y como sucede en el caso del terrorismo (Teitel, 2003). A pesar de los aportes que hace Teitel en esta materia, nos

separamos de sus planteamientos en algunos aspectos. Por una parte, pensamos que si bien las caracterizaciones que hace de cada modelo transicional son bastante precisas y enriquecedoras, en algunos casos resulta problemático reducir la clasificación de los procesos transicionales a una cuestión meramente histórica. En efecto, para ofrecer tan sólo un ejemplo, aun cuando cronológicamente hablando ocurrieron en el periodo posterior a la Guerra Fría, las transiciones de Ruanda y Yugoslavia se adaptan al modelo de justicia retributiva propio de lo que Teitel denomina la primera época de la JTr. Por otra parte, desde la perspectiva adoptada en este escrito, los tres modelos de Teitel se refieren más a formas de transición (en el sentido amplio del término) que a tipos específicos de JTr. De ahí que, para efectos de este documento, tan sólo el segundo periodo de JTr identificado por Teitel coincide con lo que aquí se comprende como el paradigma de JTr, pues sólo en aquél se evidencia el dilema que enfrenta la JTr, consistente en la necesidad de hallar un equilibrio entre las exigencias de justicia y paz, dilema que es el que, en nuestro concepto, le otorga especificidad a la novedosa categoría de JTr¹.

Ahora en todos los casos reseñados, la justicia transicional ha enfrentado duras críticas especialmente por la cuestión fundamental de encontrar una solución viable políticamente que, sin dar lugar a la impunidad, sí haga posible alcanzar una paz y una reconciliación nacional durables con la compleja tarea de encontrar un punto medio entre los polos de justicia retributiva plena, por un lado, y de impunidad absoluta, por el otro.

En el ámbito Colombiano el legislador cuenta con un amplio margen de configuración, teniendo la facultad de establecer el diseño de la política criminal y el derecho penal, pero tal potestad encuentra sus límites en la Constitución Política y en las normas que integran el bloque de constitucionalidad. (CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-148 de 2005. M.P.: Álvaro Tafúr Galvis).

¹ *Ibíd.*

Es de tal importancia el denominado bloque de constitucionalidad que el examen de constitucionalidad de una norma se hace no sólo con referencia a lo establecido en la Carta Política sin en una serie de normas y principios no consagrados en ella pero que se integran al mismo.

Ahora como se ha señalado precedentemente, se han tipificado delitos que son protegidos internacionalmente, como el genocidio, y al respecto se dio un análisis de constitucionalidad bajo los siguientes parámetros:

“Dado que la Constitución Política no contiene disposiciones detalladas, ni definiciones, de los delitos de genocidio o tortura, para resolver los cargos formulados contra ambos tipos penales la Corte recurrió a las definiciones consagradas en tratados internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, para efectos de determinar si el Legislador había desconocido los límites por ellas impuestos a su margen de configuración en materia penal. Así, luego de recordar que en Colombia es aplicable la cláusula de favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos (contenida entre otras en el art. 4 del Protocolo de San Salvador) -de forma tal que “cuando las normas constitucionales y legales colombianas ofrezcan una mayor protección al derecho fundamental de que se trate éstas habrán de primar sobre el texto de los tratados internacionales, de la misma manera que siempre habrá de preferirse en la interpretación de los mismos la hermenéutica que resulte menos restrictiva para la aplicación del derecho fundamental comprometido”-, la Corte procedió a resolver los cargos formulados así: (i) en cuanto a la palabra “grave” en el tipo de genocidio, la Corte constató que no había contradicción entre la disposición acusada y las normas internacionales que lo definen –la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional- que también contienen esa misma expresión, por lo cual no hubo violación del art. 93” (CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-148 de 2005. M.P. Álvaro Tafur Galvis).

Corolario de lo anterior, se tiene que al momento de diseñar la política criminal del Estado y al establecer los tipos penales y su sanción, el Legislador cuenta con un margen de configuración amplio pero no ilimitado, respetando no sólo la Constitución Política, sino su interpretación a la luz de las normas que conforman el bloque de constitucionalidad.

Partiendo de lo anterior en Colombia existen diversidad de organismos encargados de hacer efectivo el postulado judicial partiendo de la base de los jueces promiscuos municipales, que están ubicados en los municipios más pequeños, en segundo lugar los jueces penales municipales, en una tercera jerarquía están los jueces del circuito que se encargan de casos de mayor gravedad, a renglón seguido los jueces especializados, que se encargan de juzgar los delitos más complejos, los Tribunales Superiores del Distrito Judicial y finalmente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia de la jurisdicción ordinaria.

En 2005 ya se creó un marco normativo para la aplicación de la justicia transicional, con ocasión del proceso de negociación con algunos grupos paramilitares y se adoptó la Ley 975 de 2005 que sirve como marco jurídico para la desmovilización. Esta ley, además, regula la realización de los procedimientos penales especiales que se deben adelantar en contra de aquellos desmovilizados que han cometido crímenes atroces, define el concepto de víctima, cuál es el alcance de sus derechos, y crea instituciones como la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. La Ley consagra particularmente una serie de beneficios que se han de analizar y que constituyen un serio problema de aplicación de la

justicia transicional si no se sabe aplicar adecuadamente y en respeto de los derechos de las víctimas.

Ahora la aplicación del proceso de justicia y paz se ha controvertido ampliamente en el país pues si bien es una muestra fehaciente de la justicia transicional y garantiza el derecho de las víctimas sin impunidad, para otros se trata de un mecanismo que por el contrario conlleva a que no se castiguen ni se reparen adecuadamente a las víctimas

“Otros han afirmado que a pesar de contemplar estándares aceptables, puede llevar a la impunidad de facto debido a las “limitaciones de sus mecanismos de implementación” Para algunos, la ley y sus decretos reglamentarios son para los victimarios, pues no garantizan adecuadamente la realización de los derechos de las víctimas. La Ley ha sufrido importantes cambios desde su primera formulación. La propuesta inicial del Gobierno permitía que los desmovilizados no debieran cumplir con la pena que se les impusiera y no incorporaba garantías para los derechos de las víctimas. Esta propuesta fue objeto de serias críticas por parte de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional. La presión ejercida permitió que la ley aprobada en diciembre de 2005 –Ley 975 o Ley de Justicia y Paz– tuviera un esquema muy distinto al inicialmente planteado por el gobierno, de acuerdo con el cual los desmovilizados que hubieran cometido crímenes atroces deberían pagar una pena alternativa. Este cuerpo normativo usaba en la enunciación de los principios un lenguaje cercano a los derechos de las víctimas, pero no preveía mecanismos adecuados para garantizarlos.

De allí que en 2006 la Ley fuese demandada en varias ocasiones, por considerarla inconstitucional. Entonces vino la intervención de la Corte Constitucional, que mediante la sentencia C-370 le introdujo cambios importantes, como la exigencia de una confesión plena por parte del desmovilizado –tanto de los actos cometidos, como de los bienes que deberían servir para la reparación– para poder acceder a los beneficios consagrados a su favor. Esto hizo que la Ley se ajustara en lo esencial a los estándares internacionales en la materia. Sin embargo, sus mecanismos de implementación siguen siendo deficientes y en consecuencia los derechos de las víctimas pueden no ser satisfechos plenamente” (FUNDACIÓN PARA EL DEBIDO PROCESO LEGAL, 2010. p. 107).

De manera que el problema central de la aplicación de la justicia transicional, es cuando se han presentado graves violaciones al derecho internacional y a los derechos humanos, que se pueden resumir en lo siguiente:

La Ley de Justicia y Paz y sus desarrollos posteriores ofrecen obstáculos normativos adicionales. Así, por ejemplo, la definición de víctima no incluye a quienes hayan sido afectadas por agentes del Estado y en la práctica solo cobija a víctimas de los paramilitares, pues estos constituyen el grueso de los desmovilizados en virtud de la Ley 975 de 2005. De los 3.711 postulados reportados por la Fiscalía en marzo de 2009, 3.621 pertenecían a las autodefensas y 90 a otros grupos armados ilegales –FARC, ELN, ERP y EPL–. Esto ha hecho que en Colombia tienda a crearse una especie de asimetría entre las víctimas, pues muchas de ellas pierden la posibilidad de acceder a los mecanismos creados para la satisfacción de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. El problema de

acceso a la justicia para las víctimas se complica porque los funcionarios no tienen suficiente conocimiento del marco jurídico que permite su reconocimiento y la satisfacción de sus derechos. Además, dicho marco resulta muy complejo y poco entendible para las víctimas

En relación con los obstáculos organizacionales, hay múltiples factores que dificultan las investigaciones y juicios penales. Así, por ejemplo, las dificultades para acceder a zonas apartadas del territorio nacional en donde se presentan violaciones graves de los derechos humanos. Estas dificultades se pueden deber tanto a las características geográficas del territorio, como a la falta de vías de transporte adecuadas y las limitaciones en recursos para asegurar las movilizaciones de los investigadores. La escasez de recursos contribuye además a dificultar el acceso a los medios técnicos de prueba. En el caso específico de la Ley de Justicia y Paz, una investigación reciente de la Fundación Social constata que las instituciones que deben implementarla no cuentan con “la infraestructura, los recursos físicos, técnicos y humanos para atender adecuadamente a las víctimas” lo cual hace que no puedan responder a la demanda de justicia que se ha generado².

² Ibídem

9. CONCLUSIONES

Se concluye que según la unidad de atención y reparación integral (2014), se destinó las siguientes indemnizaciones de la siguiente manera: A 163 víctimas en el municipio de Dosquebradas por valor de 692 millones de pesos, en Pereira a 135 por valor de 784 millones de pesos, en Quinchía a 38 por valor de 102 millones de pesos, en La Virginia a 5 por valor de 27 millones de pesos, en Apia a 4 por valor de 19 millones de pesos, en La Celia a 2 por valor de 23 millones de pesos, en Marsella a 2 por valor de 21 millones de pesos, en Santa Rosa de Cabal a 2 por valor de 30 millones de pesos, en Pueblo Rico a 1 por valor de 25 millones de pesos, en Santuario a 1 por valor de 8 millones de pesos, y en Guática a 1 por valor de 3 millones de pesos.

En concreto, el modelo transicional pretende centrarse en el futuro otorgando una importancia fundamental a la búsqueda de mecanismos a través de los cuales se puede adquirir conciencia al implicado acerca del daño que causó, reconocer su responsabilidad e intentar reparar ese daño. Se busca entonces además de todo una reconciliación entre víctimas y victimario, basada en el perdón solicitado por éste y obtenido con la voluntad de aquella, se busca una implicación más allá del castigo. La Justicia transicional exige equilibrar las exigencias contrapuestas de paz y justicia y se caracteriza por negociaciones políticas entre los diferentes actores, tendientes a lograr acuerdos satisfactorios para todas las partes como para que éstas decidan aceptar la transición.

Es preciso entonces señalar que en Colombia la muestra fehaciente de la Justicia Transicional son los diálogos de paz que se adelantan en la Habana con las FARC, que pretenden llevar a cabo una transformación social y política buscando una situación pacífica, situación que su vez es compleja pues implica la difícilísima tarea de equilibrar la justicia y la paz. Ello se traduce en señalar que son tan importantes los derechos de las víctimas como los de los procesados. Pero más allá de esto existen tensiones entre las exigencias jurídicas internacionales relativas a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de guerra o de lesa humanidad, y las restricciones impuestas por las negociaciones de paz llevadas a cabo por los actores armados con miras a lograr la paz.

10. BIBLIOGRAFÍA

- ALBALADEJO ESCRIBANO, Isabel (2009). Informe de la Oficina En Colombia Del Alto Comisionado De Las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos. *La desaparición forzada de personas en Colombia Cartilla para la víctima*. Primera edición, Bogotá D.C. Recuperado de http://www.hchr.org.co/publicaciones/otras/cartilla_victimas.pdf
- AMBOS, Kai (2008). *El marco jurídico de la justicia de transición, especial referencia al caso colombiano*. Temis, Bogotá.
- AMBOS, Kai. (2009). *Desaparición forzada de personas. Análisis comparado e internacional*. Bogotá, Temis.
- BARBOSA DELGADO, F. (2002). *El litigio Interamericano. Perspectiva jurídica del sistema de protección de derechos humanos*. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano.
- BARRERA BERRIO, Adolfo y MEDINA ALVIS, Yoan Alippzer (2011). *El Estado Colombiano frente al delito de desaparición forzada*. Tesis de Maestría, Universidad Militar Nueva Granada, Especialización en Procedimiento Penal Constitucional y Justicia Penal Militar. Recuperado en <http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7139/1/BarreraBerrioAdolfo2012.pdf>

- BOTERO MARINO, C., RESTREPO, E., SAFFON, M. P., & UPRIMNY YEPES, R. (2006). *¿Justicia transicional sin transición? Reflexiones sobre verdad, justicia y reparación en Colombia*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- CITRONI, Gabriela (2003). *Desaparición forzada de personas: Desarrollo del fenómeno y respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Anuario de derecho internacional. XIX, 373-408. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10171/22114>
- CHINCHÓN ÁLVAREZ, Javier. (2007). *Derecho internacional y transiciones a la democracia y la paz: hacia un modelo para el castigo de los crímenes pasados a través de la experiencia iberoamericana*. Sevilla, Ediciones Parthenon.
- FUNDACIÓN PAÍS LIBRE. Los retos jurídicos frente a la desaparición forzada y de los mecanismos de protección existentes para la satisfacción de los derechos de las víctimas.
- HUERTAS DÍAZ, Omar. (2013). *La imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada: el caso de Plazas Vega*. Universidad Externado de Colombia.
- GONZALEZ CHAVARRIA, Alexander. (2010). *Justicia transicional y reparación a las víctimas en Colombia*. Rev. Mex, Sociol Vol. 72 no. 4 México. Recuperado de

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032010000400005

LOZANO VILLEGAS, Germán (2014). Informe Desaparición forzada Tomo I: Normas y Dimensiones de la desaparición forzada en Colombia. Primera Edición ISBN:978-958-58167-5-6. Recuperado de <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2014/desaparicion-forzada/Tomo-I.pdf>

MAYA RICO, María Elena (2008). *El Delito de desaparición forzada en Colombia y Garantía del Estado*. Monografía de grado Universidad de Antioquia, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Colombia: Medellín. Recuperado de http://mitra.udea.edu.co/~prueba/archivos/informes_finales/informe_final30.pdf

RECOPIACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. (2002). Volumen I (Primera parte) Instrumento de Carácter Universal. Naciones Unidas: Nueva York y Ginebra. Recuperado de <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Compilation1sp.pdf>

RETTBERG BOIL, Angelika. (2005). *Entre el perdón y el paredón preguntas y dilemas de la justicia transicional*. Universidad de los Andes. Primera edición.

RINCÓN, Tatiana. (2010). *Verdad, justicia y reparación la justicia de la justicia transicional*. Universidad del Rosario.

UPRIMNY-YEPES, R., & SÁNCHEZ, N. C. (2010). Los dilemas de la restitución de tierras en Colombia. *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, 12(2), 305-342. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v12n2/v12n2a10.pdf>

Jurisprudencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos (26 de mayo de 2010). Manuel Cepeda Vargas vs Colombia, 216

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (1988). Velasquez Rodríguez.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velasquez Rodríguez vs. Honduras.

Corte Permanente de Justicia Internacional, Merits (caso Factory of Chorzów 1928).

Webgrafía

<http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Risaralda.pdf>

<http://www.ediec.org/es/areas/descripcion/victimas-y-sus-derechos/>

<http://www.procuraduria.gov.co>

<http://www.indepaz.org>.

<http://www.amnesty.org>

<http://www.hchr.org.co>

<http://www.centrodememoriahistorica.gov.co>

<http://www.ddhhcolombia.org.co>

<http://www.paislibre.org>

<http://www.cancilleria.gov.co>

<http://www.onu.org>

<http://www.uexternado.org>.

<http://www.bibliojuridica.org>.



Corrección de Estilo

Octubre 26 de 2015

Doctores

Julián Hernández Rodríguez

Luz Zoraida Rentería Castro

Sandra Milena Pineda Echeverri

Universidad Libre Seccional Pereira

Con la presente me permito informarles que al proyecto titulado “**ANÁLISIS DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA EN RISARALDA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1448 DE 2011 (10 DE JUNIO DE 2011) A LA ACTUALIDAD..**” se le realizó corrección de texto, que comprende la revisión de redacción, ortografía y estilo, aplicando las normas APA según la 6th Ed., en su Contenido, Pie de Páginas, y Bibliografía.

Agradezco de antemano la atención prestada y su confianza depositada

Viviana Martínez G